

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, cuatro (04) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

DEMANDANTE : LEIDY YANET VÉLEZ VÉLEZ
DEMANDADO : FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A,
SEGUROS DE VIDA ALFA S.A.
TIPO DE PROCESO : ORDINARIO
RADICADO NACIONAL: 05-001-31-05-006-2019-00337-01
RADICADO INTERNO : 309-22
DECISIÓN : CONFIRMA SENTENCIA
ACTA NÚMERO : 345

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, procede a emitir sentencia de segunda instancia en la que se estudia el recurso de apelación, en el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 2213 del 13 de junio de 2022, la providencia en segunda instancia se profiere escrita.

ANTECEDENTES

La parte demandante solicita se DECLARE la nulidad del dictamen emitido por la sociedad Seguros de Vida Alfa S.A. el 19 de agosto de 2017; se declare que la demandante presenta una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, de origen común y una fecha de estructuración del 2 de agosto de 2013.

Se CONDENE a Porvenir S.A. a reconocer y pagar la pensión de invalidez en forma retroactiva al demandante, incluidas las mesadas adicionales desde el 18 de enero de 2017; al pago de los intereses moratorios sobre las mesadas pensionales adeudadas hasta el pago de la obligación; al pago de la indexación, hasta el pago de la obligación; y al pago de costas procesales a las codemandadas.

Como fundamentos de los hechos plantea que la demandante fue afiliada al Régimen de Ahorro Individual administrado por la sociedad Porvenir S.A.; la demandante fue calificada por Seguros de Vida Alfa S.A. y en dictamen del 19 de agosto de 2017 determinó una pérdida de capacidad laboral del 57,59% estructurada el 25 de mayo de 2017 de origen común; a la demandante se le practicó dictamen por la IPS Universitaria el 14 de diciembre de 2018, oportunidad donde se indicó que cuenta con una pérdida de capacidad laboral del 57.59% estructurada el 2 de agosto de 2013.

Sostiene que, el dictamen de Seguros de Vida Alfa S.A., no es coherente con el complejo patológico de la accionante, dado que las fechas de estructuración son disimiles en los dictámenes enunciados.

Asegura que la demandante cuenta con los requisitos legales para acceder a la pensión de invalidez, al contar con más de 50 semanas cotizadas entre el 2 de agosto de 2010 y el 2 de agosto de 2013; la demandante elevó reclamación el 9 de abril de 2019, sin obtener respuesta de la entidad.

RESPUESTA A LA DEMANDA

La sociedad Seguros de Vida Alfa S.A. se opuso a las pretensiones de la demanda dado que no existe ningún fundamento fáctico o legal para que se declare la nulidad de la valoración y el dictamen cuya nulidad se solicita, está fundamentado en el examen de la demandante para analizar con detenimiento sus condiciones médicas y clínicas al momento de la valoración; además porque el dictamen se realizó por un grupo interdisciplinario de la entidad demandada con reconocida solvencia científica y moral. En lo que respecta a los hechos de la demanda, aceptó la afiliación de la demandante a Porvenir S.A. y la calificación realizada por Seguros de Vida Alfa S.A.. No le constan los demás hechos de la demanda. Y propuso las excepciones de falta de causa para pedir, inexistencia de las obligaciones demandadas y prescripción (expediente digital 04).

La accionada Porvenir S.A. en su contestación se opuso a las pretensiones de la demanda. Y frente a los hechos de la demanda aceptó la afiliación de la demandante al Régimen de Ahorro Individual y la calificación realizada por la sociedad Seguros de Vida Alfa S.A. Que no le consta el dictamen realizado por la IPS Universitaria y sostiene que dicho dictamen no puede ser tenido en cuenta como soporte jurídico y legal de la sentencia, al ser proferido por una entidad que no hace parte del sistema general de pensiones y porque se

realizó sin la citación de las partes contra las cuales se pretende hacer valer, lo cual atenta contra el debido proceso y el derecho de defensa. Y manifestó que los demás hechos de la demanda no son ciertos.

Propuso las excepciones de falta de causa para pedir, inexistencia de las obligaciones demandadas, buena fe, prescripción, compensación, incompatibilidad entre auxilio por incapacidad pagado por la EPS o por la AFP y la pensión de invalidez (fls. 249 a 268 del expediente digital 01).

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

En sentencia del 28 de septiembre de 2023, el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín, de forma textual ordenó:

Primero. Negar la nulidad del dictamen emitido el 19 de agosto de 2017 a la señora Leidy Yaneth Vélez Vélez por Seguros de Vida Alfa S.A.

Segundo. Declarar que le asiste el derecho a la señora Leidy Yaneth Vélez Vélez a la pensión de invalidez a partir del 15 de febrero de 2017 fecha de estructuración de su estado de invalidez.

Tercero. Condenar a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. a pagar a la señora Vélez Vélez la pensión de invalidez desde el 16 de febrero de 2017 en valor del SMMLV con su mesada adicional de noviembre, y previa deducción del porcentaje destinado al sistema de salud.

Cuarto. Ordenar a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. indexar cada mesada pensional desde cada periodo causado y hasta cuando cumpla con la sentencia.

Quinto. Las excepciones propuestas contra la demanda quedan resueltas implícitamente salvo la prescripción la cual se declara infundada.

Sexto. No hay condena en costas.

IMPUGNACIÓN

El apoderado de la sociedad Porvenir S.A. apela la decisión, respecto al reconocimiento de la pensión de invalidez; la causación del retroactivo, generado con base en la fecha de estructuración del dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez; y a la indexación.

Sustenta su recurso en que no hay lugar a reconocer la pensión de invalidez porque si bien la sentencia consideró que el dictamen emitido por Seguros de Vida Alfa goza de pleno sustento, ello lleva a que el dictamen esté en firme y no puede existir otro que lo pueda contradecir.

Señala el recurrente que no hay lugar a tener como válido el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez al no existir suficientes elementos técnicos científicos del mismo, a diferencia del emitido por Seguros de Vida Alfa S.A. que determinó una fecha de estructuración fijada desde mayo de 2017 frente al cual existe más solidez científica, por dos razones, la primera de ellas porque existe un concepto de neurología del 24 de mayo de 2017 que sirvió para fijarse una fecha de estructuración por parte de Seguros de Vida Alfa S.A., que detalla según dictamen, que la enfermedad miastenia gravis se presenta desde el año 2012 y sin mejoría significativa a tratamiento; que según concepto médico de rehabilitación y pronóstico emitido por parte de la Nueva EPS para mayo de 2017, se evidencia que la actora presenta miastenia gravis generalizada con secuelas de debilidad física y que el mismo concepto emite de manera desfavorable.

Conceptos que sirven para delimitar que una persona pueda verificar su estado de invalidez; que este mismo concepto sirve de base para efectos de consolidar que patología se estructuró desde dicha calenda.

Y en segundo lugar, porque en la historia clínica existe registro del 25 de mayo de 2017 que considera relevante.

Asegura que con los conceptos del 24 y del 25 de mayo de 2017 se puede establecer que en ese momento la demandante alcanzó una pérdida de la capacidad laboral del 50% o de tal magnitud, que se estructuró la fecha de invalidez y el porcentaje que fuera asignado por Seguros de Vida Alfa S.A.

Asegura que el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez no tuvo suficiente ilustración ni justificación al momento de la sustentación, al no existir un sustento científico y técnico al dar una fecha de estructuración en febrero de 2017 y al indagarse de las razones de establecer, porqué en esa fecha la patología de miastenia gravis se encontraba en estado residual a pesar de que se encontraba pendiente de que se proveyera los nuevos medicamentos, había un aumento de una dosis y estaba en esperar de la respuesta del tratamiento, sin embargo el perito insistió que estaba consolidada la enfermedad sin justificar el porqué, y resalta que en la justificación hizo referencia a documentos posteriores a mayo de 2017, donde a la actora se le determinó, que una vez finalizado el tratamiento su enfermedad no tenía mejoría. Aseguró el perito que, en febrero de 2017, se le prescribieron medicamentos, se le aumentó la dosis y le mandaron

tratamientos y que una vez finalizados los mismos, alcanzó la mejoría máxima, sin embargo, para esa fecha no se le habían practicado esos tratamientos.

En consideración a lo anterior, la demandante no cumple con el derecho solicitado, al no poderse tener el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez como documento que ilustre la fecha de estructuración, ni la causación del derecho pensional, con base en la densidad de semanas según esa fecha de estructuración. Que la tratarse de condenas accesorias, solicita que se revoque la prosperidad de la pensión de invalidez y de indexación y se absuelva a su representada.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La apoderada de Porvenir S.A presentó escrito de alegatos manifestando que se debe absolver a dicha sociedad de todas las condenas en su contra tras no existir fundamentos fácticos ni legales para configurarse la prestación que se condenó.

Que consideró la Juez que, en el presente caso, se evidencia que la actora ya acreditó en principio una PCL superior al 50%, no obstante, se evidencia por otro lado, que el dictamen realizado en sede administrativa por parte de ALFA cumple con los requisitos legales y técnicos para determinar la invalidez de la actora en su momento.

Que Porvenir S.A considera que no existen suficientes elementos técnicos o científicos que permitan determinar que la actora permite cumplir con los requisitos para el acceso al derecho, bien sea por el porcentaje de PCL o fecha de estructuración la cual se cuestiona en virtud de las cotizaciones.

Por otro lado, solicita que se confirme la sentencia de primera instancia, en cuanto no hay lugar a condena de intereses, mucho menos, condena en costas, lo primero, por cuanto la condena y el reconocimiento deviene de un dictamen emitido en sede judicial, y en cuanto a las costas, se encuentra que el fondo no fue vencido ya que el dictamen emitido por ALFA conservó su validez, además el reconocimiento de la pensión se da por trámite ante esta jurisdicción y no por negativa caprichosa en sede administrativa.

Por lo anterior solicita se revoque el fallo de primera instancia y se absuelva de todas las pretensiones.

PRONUNCIAMIENTO JURÍDICO

El problema jurídico se centra en determinar en virtud del recurso de apelación:

i) Si hay lugar a revocar el reconocimiento de la pensión de invalidez e indexación, por no haberse declarado la nulidad del dictamen emitido por la sociedad Seguros de Vida Alfa S.A. y al ser válido se encuentra en firme; ii) Si no hay lugar a darle validez al dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez por no contar con sustento científico y técnico al determinar una fecha de estructuración en febrero de 2017.

Se encuentra acreditado en el plenario y no es objeto de discusión que la demandante se afilió a Porvenir S.A. el 10 de marzo de 2010 según el formulario de afiliación de fl 269 del expediente digital 01; que la demandante fue calificada por sociedad Seguros de Vida Alfa S.A. el 19 de agosto de 2017, oportunidad en donde se determinó que la demandante cuenta con una pérdida de la capacidad laboral del 57.59% **estructurada el 25 de marzo de 2017** (fls. 32 a 35 del expediente digital 01); con la demanda se aportó dictamen emitido por la IPS Universitaria, emitido el 14 de diciembre de 2018, en el que se indicó que la demandante presenta una pérdida de la capacidad laboral del 57.59% **estructurada el 2 de agosto de 2013** (fls. 21 a 23); y en la etapa del decreto de pruebas, el Juzgado de oficio decretó dictamen pericial a cargo de la Junta Regional de Calificación de Invalidez, en el que se estableció una pérdida de la capacidad laboral del 55.35% **estructurada el 15 de febrero de 2017** (expediente digital 25).

Visto lo anterior, se resolverá el recurso de apelación de la siguiente manera:

1. De la validez del dictamen de Seguros de Vida Alfa S.A.

En primera instancia negó la nulidad del dictamen emitido por la sociedad Seguros de Vida Alfa S.A. por no haber fundamento, dado que la validez del dictamen solo podría discutirse respecto a la competencia para realizarlo, pero en virtud del art. 41 de la Ley 100 de 1993, la sociedad Seguros de Vida Alfa S.A. está facultada para emitir el dictamen.

En ese sentido, el apoderado de Porvenir S.A. sostiene en su recurso, que, al no ser declarada la nulidad, el dictamen de Seguros de Vida Alfa S.A. se encuentra en firme y es válido, lo que no da lugar a que se de aplicación al dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez

En relación a las nulidades de los dictámenes de pérdida de la capacidad laboral, cierto es que a la parte que pretenda derrotar un dictamen para en su lugar darle validez y aplicación a otro, tiene la carga de probar las falencias, errores o vicios por los cuales sustenta la existencia de la nulidad. Pese a ello, en el evento que dicha actuación no se ejecute, la justicia ordinaria laboral cuenta con la potestad de formar libremente su convencimiento y determinar cuál de los dictámenes que reposan en el proceso, le dan credibilidad y certeza desde el punto de vista de criterios técnicos y científicos, pero sin que sea necesario para hacer este ejercicio judicial, declarar la nulidad de los dictámenes judiciales que no se vayan a tomar pues se repite, bajo el entendido que no se demostraron falencias, errores o vicios.

Como sustento de lo expuesto, nos debemos de remitir a la sentencia SL 2082 de 2022, en donde se señala, que si bien, la prueba idónea para determinar la pérdida de capacidad laboral son los dictámenes emitidos por las entidades facultadas para ello y que corresponden a las establecidas en el art. 41 de la Ley 100 de 1993, el juez puede formar su convencimiento bajo el principio de libertad probatoria. En forma expresa explicó:

“Con fundamento en el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 142 del Decreto 19 de 2012, la prueba idónea para determinar el grado de invalidez y el origen de las contingencias de una persona corresponde, en primera oportunidad, al otrora Instituto de Seguros Sociales, a Colpensiones, a las Administradoras de Riesgos Laborales, a las compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte y a las Empresas Promotoras de Salud, con la posibilidad de que en caso de desacuerdo acudan a las juntas de calificación de invalidez.

*Por otra parte, la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que aun cuando la prueba idónea para determinar el estado y porcentaje de pérdida de capacidad laboral de una persona es el dictamen emitido por las juntas de calificación de invalidez, así como, por los organismos arriba citados, a partir de la expedición de la Ley 100 de 1993 (CSJ SL, 27 jun. 2002. Rad. 17999, CSJ SL, 29 jun. 2003, rad. 20558, CSJ SL 24 sep. 2003, rad. 21113), también ha reconocido que **el juez puede formar su convencimiento inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba**, sin que la circunstancia de que acuda a unos medios de convicción con preferencia sobre otros, pueda considerarse como un yerro de apreciación, pues así lo reconoce el principio de libertad probatoria previsto en el artículo 61 del CPTSS.” (Resalto de la Sala)*

Y en sentencia SL 2349 de 2021, se retomó apartes de la sentencia SL 29.622 de 2006 en donde se expone que los dictámenes de las instituciones de la seguridad autorizadas para proferir dictámenes de pérdida de capacidad laboral son controvertibles. Al unísono se plasmó:

“Ahora, la Sala ha establecido que los dictámenes que profirieran las juntas de calificación de invalidez regionales o nacional pueden controvertirse ante los jueces del trabajo, quienes tienen competencia para examinar los hechos que contextualizan la condición incapacitante establecida por aquellas (CSJ SL 29622, 19 oct. 2006 y CSJ SL5280-2018). Precisamente, en la primera sentencia referida la Corporación explicó:

*“Ciertamente, la Corte ha estimado que en la actualidad el estado de invalidez de un trabajador corresponde establecerse mediante la valoración científica de las juntas de Calificación, a través del procedimiento señalado en los reglamentos dictados por el Gobierno Nacional. **Pero la Sala de Casación Laboral no ha sostenido que los parámetros señalados en el dictamen de la Junta sean intocables (...)** De ninguna manera ha considerado la Corte que los hechos relativos a las circunstancias de tiempo, modo y lugar sobre el hecho genitor de la minusvalía, tenidos en cuenta por uno de tales entes, o por ambos si se agotan las dos instancias, **sean materia incontrovertible ante la jurisdicción del trabajo (...)**”*

*Así las cosas, las partes pueden discutir el contenido de los dictámenes que emiten las juntas de calificación de invalidez ante la jurisdicción ordinaria laboral; incluso, en el curso del proceso, **el juez puede como en este caso, ordenar una nueva valoración para decidir conforme a la sana crítica, en relación con la pretensión que se reclama.** Y en ese contexto, tal dictamen no tiene que ser necesariamente emitido por la Junta Regional o Nacional de Calificación de Invalidez, sino que puede serlo por otro ente especializado en el asunto objeto de valoración. (...)*” (Resalto de la Sala).

En consideración a lo expuesto, no le asiste razón a la parte accionada Porvenir S.A, de que se adopte el dictamen de pérdida de la capacidad laboral de Seguros de Vida Alva S.A, bajo el entendido que al no haberse decretado la nulidad, el mismo se encuentra en firme, pues conforme a lo expuesto, en el presente proceso existen 3 dictámenes de pérdida de la capacidad laboral, ello son, los de Seguros de Vida Alfa S.A, la IPS Universitaria y la Junta Regional Calificación de Invalidez, frente a los cuales la A Quo podría analizar y formar su libre convencimiento conforme lo establece el art. 61 del CPT y SS.

2. De la validez del dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez

En primera instancia se le dio validez y aplicó el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez al considerar que el sustento de la fecha de estructuración del 15 de febrero de 2017 se sustenta en que, corresponde con el día en que neurología señaló que la paciente presenta miastenia gravis resistente al tratamiento, persisten síntomas diarios, diplopia, fatigabilidad de

cintura conforme se extrae de la historia clínica que reposa en el fl. 569 expediente digital 13. Y teniendo en cuenta que, en la contradicción del dictamen, el perito sustentó la fecha de estructuración, al señalar que para ese momento definitivamente no fue posible recuperación de las patologías sufridas por la demandante, sustentó que la A Quo calificó como claro, coherente y concordante y confrontado con el soporte documental del proceso.

Decisión que fue apelada por la sociedad Porvenir S.A por no existir elementos técnicos científicos del mismo, y porque con los conceptos del 24 y 25 de mayo de 2017 se puede establecerse que en ese momento la demandante alcanzó una pérdida de la capacidad laboral del 50%, que se estructuró la fecha de invalidez.

Argumentos que no serán acogidos por la Sala, teniendo en cuenta que, Seguros de Vida Alfa S.A, emitió dictamen el 19 de agosto de 2017, oportunidad donde reconoció que la fecha de estructuración data del **25 de marzo de 2017** justificada en que “se estructura con la fecha de la última valoración por neurología que verifica el estado actual de su patología” (fl. 34 del expediente digital 01).

Por su parte, el dictamen realizado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, que tuvo lugar el 23 de marzo de 2023, plasmó como fecha de estructuración el **15 de febrero de 2017** toda vez que corresponde al “día que neurología señala, que la paciente presenta miastenia gravis, resistente al tratamiento, persisten síntomas interdiarios (ptosis, diplopía, disfonía, fatigabilidad en cintura), y tiene marcha con miopatía; alteraciones del SNP que persisten en el momento actual”.

Y en la sustentación del dictamen, el perito de la Junta Regional de Calificación de Invalidez manifestó que la fecha de estructuración se determinó desde el 15 de febrero de 2017 porque con anterioridad a esa fecha, en el año 2016, la demandante tuvo hospitalizaciones por crisis miastémicas y es cuando el especialista en neurología determinó, que la enfermedad era resistente a los tratamientos y la paciente no mejoraba, oportunidad en que **empieza a considerarse una secuela**, y asegura que ello fue corroborado el 24 de mayo de 2017 por neuroinmunología cuando se dijo que presentaba una miastenia gravis generalizada con antecedentes de crisis mistémica, secuelas debilidad física, con pronóstico desfavorable; asegura que pese a que posteriormente, en el año 2019 a la demandante le hicieron trasplante, le incrementaron dosis de un medicamento e iniciaron otro se mantiene la fecha de estructuración del

15 de febrero de 2017 porque pese ello, la paciente no mejoró, continuo igual de mal a como estaba en esa fecha, e inclusive emporó; que a partir de ese momento, es que la paciente tiene limitaciones tan graves que ni con los tratamientos posteriores mejoró, y por eso la consideran inválida.

En ese sentido, luego de ser valorada en su conjunto las pruebas, de acuerdo a las reglas de la **sana crítica y la libre formación del convencimiento** (art. 61 del CPL), al hacer el estudio de la historia clínica y los dictámenes que reposa en el plenario, la Sala CONFIRMARÁ la decisión de la A Quo, al no tener la razón la sociedad accionada cuando asegura que el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez no cuenta con criterios científicos, en tanto que el perito fue claro en asegurar que a pesar, que el 15 de febrero de 2017 se ordenó iniciar un nuevo medicamento, se incrementó la dosis de otro y se realizó en el año 2019 trasplante de médula, **las secuelas** datan desde el 15 de febrero de 2017 al no haber existido mejora aún con dicho plan de tratamiento.

En ese sentido, como los dictámenes de pérdida de la capacidad laboral califican secuelas y no patologías, y conforme lo expuso el perito, las mismas se presentaron desde el 15 de febrero de 2017 y no desde el 25 de marzo de 2017 y conforme a ello se le dará igualmente validez la fecha de estructuración determinada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez tal y como se hizo en primera instancia, lo que da lugar a que sea confirmada la sentencia recurrida.

Costas en esta instancia, en la suma de \$1.160.000 a cargo de Porvenir S.A., por no haber prosperado el recurso de apelación.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín, por lo expresado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Costas en esta instancia, en la suma de \$1.160.000 a cargo de Porvenir S.A., por no haber prosperado el recurso de apelación.

TERCERO: Las anteriores decisiones se notifican por EDICTO, conforme lo dispuesto en la providencia AL 2550, radicación 89628 del 23 de junio de 2021 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados.



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



JUAN DAVID GUERRA TRESPALACIOS



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



SECRETARÍA SALA LABORAL
EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

DEMANDANTE : LEIDY YANET VÉLEZ VÉLEZ
DEMANDADO : FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A,
SEGUROS DE VIDA ALFA S.A.
TIPO DE PROCESO : ORDINARIO
RADICADO NACIONAL: 05-001-31-05-006-2019-00337-01
RADICADO INTERNO : 309-22
DECISIÓN : CONFIRMA SENTENCIA

Magistrado Ponente
HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 05 de diciembre de 2023 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 05 de diciembre de 2023 a la 5:00pm

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO